

## HECHOS Y CONTEXTO\*

**Lucas Sierra**

Una vez más, en 14 años, el pasado se trae al presente. Otra vez se discuten causas y responsabilidades. Sin embargo, no se discuten los hechos básicos de ese pasado. Su “contexto” genera y seguirá generando controversia, pero no los hechos propiamente tales.

Así ocurrió con el informe Rettig. Nadie habla más de “presuntos” desaparecidos, más aún cuando años después, con la Mesa de Diálogo, los uniformados confesaron haber tirado cuerpos al mar. Hoy pasa algo parecido con el informe de la comisión que encabezó el obispo Valech, en la que participé.

De nuevo, distintas interpretaciones compiten sobre el “contexto” de la prisión política y de la tortura, pero poco a poco se va decantando el hecho de que tales prácticas existieron. En esto ha ayudado la reacción de los uniformados. A diferencia de la que tuvieron frente al informe Rettig, su disposición ha sido receptiva y, en general, han aceptado el contenido del nuevo informe.

Si hasta ahora se podía oír que la prisión política y la tortura habían sido hechos “aislados”, ya no parece posible seguir haciéndolo. Podremos discutir causas y responsabilidades, pero no el hecho de que fue una práctica sistemática, que involucró normas jurídicas y recursos fiscales, y que fue reflejo de una concentración inaudita de poder, de un Estado hipertrofiado, excedido de sí mismo frente a los individuos.

¿Qué sentido tiene esto 30 años después? Tiene, creo, dos sentidos fundamentales. Respecto de las víctimas, el intento por restablecer un cierto equilibrio entre ellas y el Estado, roto de manera brutal. Respecto de la sociedad, el intento por iluminar los hechos de un pasado percibido difusamente, con más preguntas que respuestas. Si la percepción es difusa, si hay más preguntas que respuestas, es imposible mirar con realismo el futuro: no se puede avanzar en paz pisando sobre dudas. Sólo si éstas se despejan, puede trazarse una línea entre pasado y futuro.

Algunos temen que se abran viejas heridas. La reacción de los uniformados sugiere que se trata de un temor infundado. Pero el punto es

---

Lucas Sierra. Abogado, Universidad de Chile. Ph. D. en Ciencias Sociales y Políticas, Universidad de Cambridge. Profesor de Derecho, Universidad de Chile, columnista del diario *El Mercurio*, e investigador del Centro de Estudios Públicos. Integró la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura que elaboró el informe dado a conocer por el Presidente Lagos el 28 de noviembre de 2004.

\* Columna publicada en el diario *El Mercurio* el 6 de diciembre de 2004.

pertinente para tratar con sensatez la cuestión de las responsabilidades, en especial de los civiles. ¿Cuánto sabíamos? ¿A quién hay que acusar? ¿A los que no empuñamos las armas y ni siquiera participamos en una protesta? ¿A los que votaron Sí en 1988? Sería absurdo, pues supone que el conocimiento es binario: se sabe todo o nada, como un claroscuro. La experiencia, sin embargo, enseña que es gradual: se sabe más o menos e, incluso, a veces comprensiblemente no se quiere saber.

¿Y los civiles que participaron del régimen? Obviamente, también hay grados: parecen más comprometidos los que estaban más cerca del uso de la fuerza. Pero entre éstos hay que distinguir entre los que se retiraron al mundo privado y los que siguen en el público de la política. Los primeros están en manos de sus conciencias. Los segundos, en cambio, decidieron exponerse a que su pasado sea escrutado públicamente. Están en manos del electorado. □

#### INFORMES\*

El retorno a la democracia ha contado con dos informes: el de la comisión Rettig y el reciente de la comisión Valech, en la que participé. Esto no es raro en sociedades que, como la nuestra, han experimentado fracturas en sus regímenes democráticos, seguidas de una concentración del poder que invitó, irresistiblemente, a su abuso. Es parte del legado del autoritarismo.

Este legado hipoteca el retorno a la democracia. ¿Qué hacer con él? Difícil: los responsables siguen vivos y, a veces, con poder; hay amnistías y prescripción, el conocimiento de lo ocurrido toma tiempo en asentarse, pues la concentración de poder que permitió el abuso corrió un velo sobre él. Cualquier sentimiento de justicia choca con un muro. La literatura llama a este verdadero karma de las transiciones “justicia transicional”.

Los informes Rettig y Valech son parte de nuestra justicia transicional. Obviamente, no hacen justicia en un sentido jurisdiccional del término, pero sí en otros, pues dan visibilidad a víctimas por largo tiempo postergadas, y echan luz sobre las prácticas en que se embarcó el poder. De este modo, dificultan la negación e incentivan el reconocimiento. Hay algo justo en esto. En un sentido histórico, tal vez.

El propósito de contar una historia asemeja a ambos informes, como dos capítulos de un mismo relato. Hay entre ellos, sin embargo, significativas diferencias, cuantitativas y, más importante, cualitativas. Los casos co-

\* Columna publicada en el diario *El Mercurio* el 27 de diciembre de 2004.

nocidos por la comisión Rettig son una décima parte de los conocidos por la Valech. Esto tiene que ver con su muy distinto carácter: la primera conoció ejecuciones y desapariciones; la segunda, prisión política y tortura. Explica también el modo diferente en que llegaron a sus conclusiones.

Por lo pronto, la comisión Rettig no pudo contar con el testimonio de las víctimas. Además, de las ejecuciones hay poco rastro, carencia que se agrava al extremo en el caso de las desapariciones: lo dramático de éstas es, precisamente, el hecho de que no hay rastro.

De los casos de la comisión Valech hay más rastro. Las víctimas están vivas para dar testimonio. Además, en un gran número de casos, la prisión política tiene prueba documental: listados de las Fuerzas Armadas, certificados, bandos publicados en la prensa, expedientes judiciales, archivos. La represión en Chile tuvo una cara burocrática. Puede sonar escalofriante, pero es muy útil para reconstruir la historia.

La tortura es distinta. Casi nunca deja rastros visibles tantos años después y, claro, no hay prueba documental. Por lo mismo, como señala su informe, la comisión Valech no pretendió probar la tortura respecto de cada persona en particular, pero, por el número inmenso de testimonios coincidentes sobre métodos, recintos y períodos; por denuncias hechas en su época y por otros antecedentes; sí pudo convencerse de que tuvo carácter sistemático y, también, de que no hay razones para dudar de los presos políticos cuyas denuncias son coherentes con este carácter. □